



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, dos (02) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Demandante: RAMIRO ANTONIO HENAO LONDOÑO
Demandado: ACP COLPENSIONES, Y JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE
INVALIDEZ DE ANTIOQUIA
Radicado: 05001 31 05 003 2021 00044 01
Sentencia: S-207

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en este acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a revisar en grado jurisdiccional de **consulta en favor de la parte demandante**, la sentencia absolutoria de primera instancia emitida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín el día 22 de noviembre de 2022.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES

RAMIRO ANTONIO HENAO LONDOÑO demandó a la ACP COLPENSIONES y a la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA, para que se dejen sin efecto los dictámenes

emitidos por las demandadas, y en consecuencia se determine que posee una pérdida de capacidad laboral -PCL- del 53.9% con fecha de estructuración del 15 de marzo de 2017 de origen común. Y que se condene en costas a las demandadas.

HECHOS

Fundamenta sus peticiones afirmando que nació el 6 de agosto de 1995; que desde que empezó a laborar se desempeñó como agricultor, por lo que sus manos han sido su prioridad para desempeñar las labores; que con el paso del tiempo comenzó a sentir fuertes dolores y pérdida de fuerza en su mano derecha, sufriendo una serie de padecimientos; que se le han hecho constantes tratamientos en busca de la rehabilitación sin presentar mejoría y, por el contrario, continúa con fuertes dolores. Añade que fue calificado por COLPENSIONES, el 25 de junio de 2018, con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 19.5%. Que la Junta Regional de Invalidez de Antioquia, estableció una P.C.L. del 36.59% de origen común, con fecha de estructuración del 30 de mayo de 2018. Que en vista de que no se habían tenido en cuenta todas las patologías, se realizó un dictamen particular ante la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, en donde se le otorgó una P.C.L. del 53.9% con fecha de estructuración del 15 de marzo de 2017.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Al contestar, COLPENSIONES indica que el demandante nació el 6 de agosto de 1955 y no en 1995; que no le consta que haya empezado a laborar como agricultor; tampoco que presente dolores que le hayan ocasionado la pérdida de fuerza en su mano. ni le consta que le hayan realizado al actor tratamientos para su rehabilitación. Admite el dictamen emitido por esta entidad, pero no le consta el realizado por la Junta Regional ni el dictamen de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Se opuso a las pretensiones por carecer

de fundamentación fáctica y legal. Como excepciones de fondo propuso validez del dictamen, inexistencia de la obligación de reconocer pensión de invalidez, no condena por ultra y extra petita, buena fe, compensación, prescripción e imposibilidad de condena en costas.

La JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA, manifestó en su contestación que es cierta la fecha de nacimiento del demandante; que no le consta las labores que desempeñaba; que son parcialmente ciertos los diagnósticos que posee el demandante; que no le consta si se le han realizado varios tratamientos para su rehabilitación; que son ciertas las calificaciones realizadas por COLPENSIONES y por la Junta Regional pero no le consta la calificación efectuada por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, advirtiéndole que es aquella la única entidad por creación legal llamada a dirimir las controversias que se suscitan entre las administradoras de los fondos pensionales y sus afiliados. Se opuso a las pretensiones. Y como excepciones planteó que el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez es plenamente válido, la determinación de la pérdida de capacidad laboral, el origen y la fecha de estructuración están ajustadas a derecho, específicamente al manual único de calificación de invalidez, inexistencia de obligaciones de reconocimiento y pago de pensiones de invalidez, buena fe, imposibilidad de condena en costas, inexistencia de fundamentos técnicos y jurídicos para demandar. ausencia de causa para pedir, y que el estado clínico del paciente pudo variar después de que la Junta Regional emitió el dictamen de calificación y ello la exime de responsabilidad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 22 de noviembre de 2022, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, **ABSOLVIÓ** a COLPENSIONES de las pretensiones del actor, a quien condenó en costas.

Argumentó que ante la ausencia del perito de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia en la audiencia, no se logró desvirtuar el dictamen elaborado por la Junta Regional, dejándolo en firme, por lo cual debía prosperar la excepción propuesta por COLPENSIONES de inexistencia de la obligación de pagar pensión de invalidez de origen común al demandante.

Se conoce del asunto vía grado jurisdiccional de **Consulta** a favor de la demandante.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Una vez surtido el traslado respectivo, la apoderada de COLPENSIONES en sus alegatos solicita confirmar la absolución, toda vez que la parte actora no probó que contaba con una PCL igual o superior al 50% para ser beneficiario de la pensión de invalidez, indicando a su vez que conforme al artículo 142 del Decreto Ley 019 de 2012, que modifica el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 52 de la Ley 962 de 2005, para la determinación del estado de invalidez les corresponde a la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES- a las Administradoras de Riesgos Profesionales ARP- a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, por lo que no puede impartírsele validez a un dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral distinto al que emitan las entidades avaladas por el sistema de seguridad social en pensiones; y que debe tenerse en cuenta que el dictamen emitido por la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, presenta un error matemático en la fórmula, como lo señala el médico Heberto González Rodelo.

CONSIDERACIONES:

Para comenzar, debe advertirse que para acceder al reconocimiento de una pensión de invalidez, el afiliado debe acreditar los requisitos

consagrados en los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993 (este último modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003), los cuales indican que tiene derecho a tal prestación quien, básicamente, sufra una pérdida de capacidad laboral por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, igual o superior al 50%, además de que cumpla con otras condiciones relacionados con el número mínimo de semanas cotizadas al sistema.

En el presente caso, el señor RAMIRO ANTONIO HENAO LONDOÑO sustenta su pretensión a la pensión de invalidez en el sentido de que no se le tuvieron en cuenta varias patologías que le impiden desempeñar su labor como agricultor, actividad que ha desempeñado durante toda su vida.

Sobre esta situación particular, es necesario hacer una serie de precisiones con las cuales se logra llegar a la misma conclusión adoptada por el juez de primera instancia en su sentencia, esto es, que el demandante no cumple con las exigencias legales para que pueda ordenarse a su favor el reconocimiento de la pensión de invalidez de origen común.

En ese sentido, lo primero que se debe advertir es que el artículo 41 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 142 del decreto 19 de 2012, señala que la calificación del estado de invalidez será determinado con base en el manual único para la calificación de invalidez vigente a la fecha de calificación, y que le corresponde a COLPENSIONES, a las Administradoras de Riesgos Laborales, a las Compañías de Seguros y a las Entidades Promotoras de Salud, determinar, en una primera oportunidad, determinar la pérdida de capacidad laboral, calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias.

De igual forma expresa dicho artículo que en caso de que el interesado no esté de acuerdo con la calificación deberá manifestar su

inconformidad dentro de los 10 días siguientes y la entidad deberá remitirlo a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez del orden regional dentro de los 5 días siguientes, cuya decisión será, así mismo, apelable ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la cual decidirá en un término de 5 días. Por último, señala que contra dichas decisiones proceden las acciones legales.

Por otro lado, la Corte Constitucional a través de sentencia C-120 de 2020, al declarar exequible el segundo inciso del artículo 142 del decreto 19 de 2012, fue clara en manifestar que existen dos eventuales procedimientos para controvertir los dictámenes, uno administrativo y otro judicial, siendo este último posterior, teniendo en cuenta que existe una capacidad institucional en donde se confía a expertos la calificación de la capacidad laboral, siempre fundada en criterios objetivos.

Dicho esto, debe partirse de la base indiscutida en este caso, de la existencia de los siguientes dictámenes:

1. Un primer dictamen de pérdida de capacidad laboral realizado el 25 de junio de 2018 por **COLPENSIONES**¹, que estableció un porcentaje de PCL del **19.5%**, con fecha de estructuración el 30 de mayo de 2018, en el cual solo se tuvo en cuenta la deficiencia de la disminución de los rangos de movilidad del hombro flexión derecho
2. Inconforme con el dictamen emitido por COLPENSIONES, el actor recurrió a la **JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE ANQTIQQUIA**, entidad que mediante el dictamen 79078² del 29 de mayo de 2019, le diagnosticó una PCL del **36.59%**, con igual fecha de estructuración - 30 de mayo de 2018 - y en donde se tuvieron los diagnósticos de la lesión del nervio cubital, el

¹ Folios 69 a 73 del PDF 17ExpedienteAdministrativo

² Folios 65 a 69 de la demanda

síndrome de manguito rotatorio y el traumatismo por aplastamiento del codo, calificándose como deficiencias el dolor mixto en codo derecho (neuropraxia del ulnar y artrosis de codo), el dolor por manguito rotador derecho que limita los AMAS y la contractura de codo y antebrazo derecho, más dominancia.

3. Como prueba aportada con la demanda, la parte actora recurrió a la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia³, la cual determinó que el demandante tiene una pérdida de capacidad laboral de **53.9%** estructurada el 15 de marzo de 2017, teniendo en cuenta patologías como contractura severa de codo postraumático, artrosis rodilla, neuropraxia del ulnar derecho, síndrome manguito rotador derecho y artrosis columna lumbo sacra, calificándose como deficiencias la alteración en rangos de movilidad codo derecho, la alteración de movimiento hombro derecho más dominancia, artrosis rodillas columna y la lesión del nervio ulnar derecho (neuropraxia dolor – pérdida fuerza).

Con este panorama clínico, pasará la Sala a resolver el planteamiento de la demanda y que tiene que ver con la calidad de inválido que dice tener el demandante.

Lo primero que se debe advertir, contrario a lo que sostiene la apoderada de COLPENSIONES, es que conforme a los artículos 11 inciso 2º y 40 del decreto reglamentario 2463 de 2001, es posible que los dictámenes de las juntas puedan ser controvertidos ante la jurisdicción ordinaria en lo laboral, los cuales incluso pueden ser desvirtuados con la aportación de otros medios de prueba, correspondiéndole al juez evaluar y establecer la realidad de cada situación. Según lo establece el referido decreto 2463 de 2001 en su art. 11, *“Los dictámenes de las Juntas de Calificación de Invalidez no son actos administrativos y sólo*

³ Folios 70 a 77 de la demanda

pueden ser controvertidos ante la justicia laboral ordinaria con fundamento en el artículo 2° del CPL".

Lo anterior se complementa con el contenido del decreto 1352 de 2013, el cual, de manera específica, dispone en su artículo 44 que: *"Las controversias que se susciten en relación con los dictámenes emitidos en firme por las Juntas de Calificación de Invalidez, serán dirimidas por la Justicia Laboral Ordinaria de conformidad con lo previsto en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, mediante demanda promovida contra el dictamen de la junta correspondiente".*

En otras palabras, los dictámenes emitidos por las juntas calificadoras no son prueba solemne o incontestable, no son definitivos ni inmutables, no atan de ninguna manera al Juez y no tienen carácter absoluto o vinculante de forma tal que no permita apartarse de lo que en ellos se dice, pues se trata de un acto sometido a control jurisdiccional.

Con esa finalidad, al proceso fue aportado un dictamen elaborado de forma previa a su iniciación por la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, la cual, como se indicó, determinó que el demandante presenta una pérdida de capacidad laboral de 53.9% estructurada el 15 de marzo de 2017, lo que, a juicio de la parte actora, sería suficiente para el reconocimiento de la prestación que reclama.

Experticia que, claramente se contrapone en su resultado con respecto al elaborado en el trámite administrativo y que en última instancia fuera realizado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, el cual arroja como resultado una pérdida de capacidad laboral, se repite, de 36.59%, con fecha de estructuración del 30 de mayo de 2018, mientras que el que se presenta con la demanda es de 53.9%, superando el requisito de ley para considerar al demandante como una persona inválida.

Luego del estudio realizado en esta instancia a los dictámenes aportados, se puede concluir que la posición del juez de primera instancia en cuanto considera que no hay lugar al reconocimiento de la pensión de invalidez del demandante, se estima ajustada a derecho, debido a que no existen elementos de juicio suficientes, técnicos y científicos, firmes y precisos, para acoger lo establecido por la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, que se aparta de lo establecido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez.

Para esos efectos, lo que define el fondo del asunto es la calidad, precisión y firmeza en los fundamentos de cada uno de los dictámenes aportados, tal y como lo prescribe el artículo 232 del Código General del Proceso, aplicable por remisión normativa del art. 145 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social: *“El juez apreciará el dictamen de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas que obren en el proceso.”*

Conforme al párrafo precedente, debe advertirse que, en la audiencia incidental, se tomó la declaración del médico HEBERTO GONZÁLEZ RODELO. perito de COLPENSIONES, quien expuso que en el dictamen elaborado por la Facultad Nacional de Salud Pública existe un error matemático en lo que respecta a la valoración del codo, pues al realizar el cálculo correspondiente no puede arrojar un resultado de 57.6%, toda vez que esta deficiencia se debe calificar conforme al literal 14.4, ya que a la deficiencia que arroje el hombro se le debe aumentar el 20%, y ese 20% es de 2.8%, que al aplicar la fórmula de Baltazar, daría como resultado 16.41% y no 57.6% como lo asume la Facultad de Salud Pública, existiendo un claro error matemático en la fórmula.

No hay discusión alguna que este es un concepto emitido por un experto calificador, el cual detalla muy específicamente el cálculo que se debió efectuar por parte del perito de la Facultad Nacional de Salud

Pública de la U. de A., no obstante, esta Sala remitiéndose al literal 14.4 del Manual Único de Calificación del Decreto 1507 de 2014, observa que efectivamente se debe dar aplicación a lo señalado por el médico perito HEBERTO GONZÁLEZ RODELO, pues esta normatividad indica: *“En todos los casos es importante tener presente el hemisferio dominante del individuo, dado que las funciones de la vida cotidiana son más dependientes de la extremidad superior dominante (diestro o zurdo). La disfunción de la extremidad superior no dominante se traduce en una menor deficiencia que la disfunción de la extremidad dominante. Para la valoración de la extremidad superior dominante, **una vez se obtenga el valor de la deficiencia global resultante de dicho estructura o extremidad corporal, debe agregarse proporcionalmente un 20% de dicho valor a esta deficiencia mediante fórmula combinada de valores.**”* (Negrilla de la Sala), por tal razón, si se debió aplicar la fórmula de Baltazar, generándose un error en dicho dictamen.

Aunado a lo anterior, reprocha la Sala la inasistencia del perito de la Facultad de Salud Pública para defender su dictamen, encuadrando dicha ausencia en lo consagrado por el artículo 228 del Código General del Proceso, aplicable por remisión normativa del art. 145 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, que en la parte final del inciso primero señala que *“Si el perito citado no asiste a la audiencia, el dictamen no tendrá valor”*, situación que ocurrió en el presente caso, tal y como lo señaló el juez de primera instancia.

Así las cosas, carece esta Sala de elementos demostrativos convincentes, contundentes y determinantes, para separarse de los diversos dictámenes emitidos por los órganos especializados – Colpensiones y Junta Regional – de manera tal que no es dable variar sus conclusiones tal como lo pretende el demandante, por el contrario, todo apunta a suponer que el demandante fue correctamente calificado por cada una de las entidades demandadas.

Todo lo anterior, sin perjuicio de que el demandante pueda, en cualquier momento, solicitar una nueva evaluación de su situación, si considera que su salud ha sufrido un mayor deterioro, o presenta una progresión negativa.

En consecuencia, la decisión de primera instancia en cuanto absolvió a COLPENSIONES del reconocimiento de la pensión de invalidez, deberá ser **CONFIRMADA** íntegramente.

Sin costas en esta instancia.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMAR la sentencia absolutoria proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín el día 22 de noviembre de 2022.

Sin costas en esta instancia.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado

Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **889129e03e184987e310bcd629d104a143ef40d029f0f8e1bb584e2b37d81f45**

Documento generado en 02/08/2023 03:11:44 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>